

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Marleny de Jesús Naranjo Hoyos
DEMANDADO	AFP Porvenir S.A y COLPENSIONES
PROCEDENCIA	Juzgado 25 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 025 2022 00003 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 026 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Ineficacia de traslado
DECISIÓN	Confirma sentencia

En la fecha, **veintiocho (28) de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento con relación al recurso de apelación presentado por el apoderado de **Porvenir S.A.** y el grado jurisdiccional de consulta en favor de **Colpensiones**, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por la señora **Marleny de Jesús Naranjo Hoyos**. Radicado único nacional 050013105 **025 2022 00003** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de las restantes integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº. 004**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

Antecedentes

La demandante pretende se declare la ineficacia del traslado que realizó al régimen de ahorro individual a través de Porvenir S.A., en consecuencia, se condene a esta entidad a devolver a Colpensiones las cotizaciones con los correspondientes rendimientos financieros, y a esta última a admitirla como afiliada y recibir las sumas que debe trasladar la AFP privada. Pide también condena en costas.

En sustento de ello afirma que, nació el 23 de agosto de 1965, afiliándose al régimen de prima media con prestación definida, fondo en el que estuvo hasta la fecha en la cual decidió trasladarse al régimen de ahorro individual administrado por Porvenir S.A., el 22 de febrero de 1995, acto que se dio, dado que el asesor de la entidad le manifestó que el ISS, hoy Colpensiones se iba a acabar, y que ella se quedaría sin pensión, adicional a que le informaron que se podía pensionar a cualquier edad y con una mesada superior, sin indicarle que esto es casi que imposible, así como que para conseguirlo es necesario acreditar otros requisitos. Afirma que tampoco se le explicó que la pensión en dicho régimen varía de acuerdo al rendimiento de sus aportes, que si tiene esposo o compañero disminuye considerablemente, y no se le puso en conocimiento el valor de la mesada en uno y otro fondo. Finalmente adujo que el 22 de noviembre de 2021, solicitó ante Colpensiones el traslado de régimen, negado por faltarle menos de 10 años para adquirir la edad para pensionarse.

Después de haberse subsanado por parte de la demandante las deficiencias advertidas por el despacho, en auto del **31 de mayo de 2022, se admitió y ordenó dar trámite a la acción**, debidamente enteradas de la existencia de la actuación las demandadas allegaron pronunciamientos así:

Porvenir S.A., manifiesta que no le constan y no son ciertos los hechos, empero, afirma que la afiliación se dio en cumplimiento de las obligaciones vigentes para la fecha, efectuándose además la debida asesoría. Resalta que la obligación de otorgar información clara, cierta, comprensible y oportuna nace en el ordenamiento jurídico únicamente a partir de la entrada en vigencia del Decreto 2241 de 2010, no existiendo para la fecha en que se firmó el formulario la obligación de emitir proyecciones pensionales, en tanto, cualquier simulación que se hiciera se daría con base en datos presuntos. **Se opuso a las pretensiones** y formuló **las excepciones** de prescripción, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y, buena fe.

Colpensiones, acepta lo relativo a la fecha de nacimiento de la actora, la afiliación al régimen de prima media con prestación definida, el traslado efectuado de este fondo al régimen de ahorro individual con solidaridad, la petición de retorno y la respuesta negativa. Frente a los restantes supuestos no le constan, debiendo probarse los mismos. **Resistió las pretensiones**, y formuló **las excepciones** de mérito que denominó: aspectos legales y financieros que impiden el retorno de la parte demandante al régimen de prima media con prestación definida, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, prescripción y/o caducidad de la acción, imposibilidad de condena en costas y, la innominada o genérica.

La primera instancia terminó con **sentencia proferida por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito**, en la que declaró la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad efectuado el 22 de febrero de 1995 por la demandante, en consecuencia, condenó a Porvenir S.A., a *"dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, traslade a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES todos los dineros que reposen en las cuentas de ahorro individual de los demandantes, incluyendo las*

cotizaciones completas y los respectivos rendimientos financieros, y sin que haya lugar a descuentos para el fondo de garantía de pensión mínima, prima de reaseguro de FOGAFÍN, gastos o cuotas de administración y sumas adicionales de la aseguradora y reaseguradora que se hubiesen podido generar...". Dispuso la indexación de las sumas a retornar con cargo a sus propios recursos, así como la discriminación de los conceptos remitidos, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información que sea relevante. Le ordenó a Colpensiones recibir los valores e incorporarlos como aportes pensionales efectivos en la historia laboral. Estableció que en caso de que Porvenir hubiese recibido los bonos pensionales en que estarían representadas las cotizaciones al RPM, los restituya a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Declaró improbadas las excepciones e impuso costas a cargo de Porvenir S.A. y en favor de la demandante.

Argumentó la falladora, después de citar la normatividad vigente frente al tema de la ineficacia, así como la jurisprudencia sobre el particular de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, que los medios de convicción obrantes en el proceso, analizados a la luz de la sana crítica, daban lugar a concluir que a la demandante no se le suministró información suficiente, y veraz sobre las consecuencias de su traslado de régimen, así como tampoco existe soporte que se le hayan explicado los requisitos referidos a la edad en que podía pensionarse y las condiciones de capital que debía acumular para poder optar al menos por una pensión mínima; el bono pensional en el que estarían representadas sus cotizaciones al RPM y la posibilidad de que tuviera que negociarse en el mercado financiero, disminuyendo su valor, el cálculo de la pensión que depende del capital depositado en la cuenta individual y según la modalidad elegida; los gastos asociados y los requisitos para obtener una pensión mínima y/o la devolución de saldos y su procedencia en caso de cumplir con esas exigencias, sin que la manifestación de recordar que se le

hizo mención al bono pensional o a la cuenta de ahorro individual, satisfaga exigencia legal y jurisprudencial en torno a la obligación de proporcionar información clara y completa al momento del traslado de régimen, así como tampoco el formulario de afiliación acredita que la determinación fue producto de una decisión libre y voluntaria, por lo que declaró la ineficacia de la afiliación, con las consecuencias anotadas.

Inconforme la **AFP Porvenir S.A., interpuso recurso de apelación;** afirma que cumplió con el deber de información vigente para la fecha del traslado, lo cual, se puede corroborar con lo dicho en el interrogatorio de parte, sin que se pueda desconocer que para la data en que se produjo no existía la obligación de dejar constancia por escrito de la asesoría, así como tampoco de dar un buen consejo, pues, el mismo solo implementó a partir del 2010 y 2014, y la doble asesoría, con la expedición de la circular 016 de 2016, de la Superintendencia Financiera. Manifiesta que la entidad cuenta con personal debidamente preparado para realizar el acompañamiento y asesoría de los afiliados, sin que se encuentre en una mejor ventaja probatoria para acreditar lo pedido en la demanda. El querer retornar al RPM radica en un asunto puramente económico, que no constituye fundamento para dejar sin efecto el acto de traslado.

Asevera que a los afiliados les asiste el deber de vigilancia y cuidado de sus propios negocios, sin que el mismo se hubiese acatado, pues, solo hasta cuando estuvo inmersa en la prohibición establecida en la Ley 797 de 2003, pide la declaratoria de ineficacia, y sabido es que nadie puede beneficiarse de su propia culpa.

En cuanto a las restituciones dispuestas en primera instancia, explica que no se debe ordenar el retorno de los gastos de administración, seguros previsionales y garantía de pensión mínima debidamente indexados, en tanto, devolver estos, y los rendimientos financieros darían lugar a un pago

doble, así como a un enriquecimiento sin justa causa en favor de Colpensiones. Que la pérdida del poder adquisitivo se resarce con el traslado de los rendimientos, los que, por demás, no debieron haber existido en la cuenta de ahorro individual atendiendo los efectos de la ineficacia.

Los gastos de administración y seguros provisionales, no se encuentran en su poder, al haber cumplido los mismos con su cometido legal de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, siendo destinados los primeros a la buena administración de la cuenta y, los segundos, ser remitidos a las aseguradoras a fin de cubrir los eventos de invalidez y sobrevivencia.

Finalmente, solicita se exonere de la condena en costas, al sujetarse su actuación al principio de buena fe, y al cumplimiento de las obligaciones legales vigentes para la época del traslado.

En favor de Colpensiones se conoce en grado jurisdiccional de consulta, en los términos del artículo 69 del C. P. T. y de la S.S. y jurisprudencia especializada.

De la oportunidad para presentar alegatos hizo uso **Porvenir S.A.**, quien luego de transcribir la parte resolutive de la sentencia centra su inconformidad en tres aspectos, la declaratoria de ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS, las ordenes en cuanto a restituciones económicas y la condena en costas; la primera por inexistencia de razones fácticas y jurídicas, toda vez que la afiliación de la demandante al RAIS se efectuó de manera espontánea, sin presiones o apremios de naturaleza alguna, cumpliendo los requisitos de ley, teniendo oportunidad de retornar al régimen público, la que no aprovechó, estando motivada la acción en la diferencia en la mesada, destacando que la entidad cumplió con las exigencias vigentes al momento del traslado, en concreto art. 97 del

Decreto 663 de 1993, surgiendo las obligaciones de asesoría y buen consejo con posterioridad, y estando la totalidad de condiciones impuestas al RAIS en la ley, sin que sea posible su modificación por las partes; en cuanto a las **restituciones**, teniendo en cuenta la validez de la afiliación no hay lugar a ellas, pero en caso de dejarse en firme la decisión, debe considerarse que los gastos de administración tienen sustento legal, Artículo 20 ley 100 de 1993, y fueron debidamente destinados, entre otras al cubrimiento de las pólizas que cubrieron los riesgos de invalidez y sobrevivencia y a la generación de rendimientos para la cuenta de ahorro individual, por lo que atenta contra toda lógica y constituye enriquecimiento sin causa para Colpensiones su devolución, debiendo tenerse también en cuenta el principio de sostenibilidad financiera, explicado en sentencia de unificación del mes de agosto de 2019 por la Sala especializada de esta Corporación cuando trató el tema de ineficacia frente a pensionados, y el concepto de la Superintendencia financiera del 17 de enero de 2020 en el que se indican los conceptos a restituir cuando se declara la nulidad o ineficacia del traslado de régimen; y frente a la **condena en costas**, esgrime que siempre actuó de buena fe, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes para la época en que se dio el traslado de la parte demandante del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, sumado a que siempre se buscó el beneficio de la parte actora, no siendo procedente la condena ante la ausencia de mala fe.

Colpensiones, esgrime que de conformidad con lo estipulado en el artículo 13 de la Ley 100 de 1.993, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 663 de 1993 y la abundante jurisprudencia proferida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, era responsabilidad de los fondos, desde su fundación brindar una asesoría necesaria y transparente, antes que un afiliado decidiera trasladarse de régimen pensional. Al demostrarse al interior del proceso de la referencia que el fondo privado

omitió con los deberes regulados en la normatividad, dicha omisión tiene como consecuencia jurídica la declaratoria de ineficacia del traslado, debiéndose en consecuencia disponer la restitución, no solo, de los rendimientos, frutos e intereses, sino también de las cuotas de administración.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones

De acuerdo con el recuento realizado, los argumentos de la apelación y **el grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones, el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si hay lugar a la declaratoria de ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS a través de la AFP Porvenir, y como consecuencia de ello, si procede su inmersión automática en el RPM administrado por Colpensiones, con las correspondientes restituciones económicas, los conceptos que estas comprenden. Finalmente se analizará la condena en costas a Porvenir S.A.

Pues bien. Reiterada ha sido la línea de la jurisprudencia **mayoritaria** de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2008, en torno al tema de la carencia de efectos jurídicos del traslado de régimen pensional cuando no está precedido de una suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información sobre las reales implicaciones de abandonar el régimen de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras, existiendo unas reglas decantadas, entre ellas que la movilidad entre regímenes debe estar precedida de la debida información y transparencia, **para el caso concreto, el traslado se efectuó el 22 de febrero de 1995**, se estaba en el primer estadio de la regulación normativa, contenida entre otras en los arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, art. 97, numeral 1º del Decreto 663 de 1993,

disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal, y por tanto el contenido mínimo estaba circunscrito a la **ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales**, lo que supone el análisis de la situación particular de cada afiliado ante el sistema, **confesándose por la AFP Porvenir en el escrito de contestación, contrario a lo que afirma en su defensa, y en lo que insiste al sustentar la alzada, que no le consta la edad, la vinculación al régimen de prima media, a pesar de obrar dentro de los anexos de la misma contestación, certificación de Asofondos donde se evidencia que la actora estaba en Colpensiones, marcándose en el formulario con el que pretende acreditar la completa ilustración, casilla vinculación traslado de régimen**, luego no es posible inferir para el cumplimiento del deber de información bajo las reglas de la normatividad vigente, primer estadio como ya se explicó, pues del pronunciamiento frente a los hechos lo que se aprecia es **absoluto desinterés y desdén por la suerte del derecho pensional del aquí demandante.**

Sobre el deber de información en cabeza de las administradoras de pensiones, pertinente resulta para el caso traer a colación lo explicado en sentencia SL2484-2022, con fecha 24 de mayo de 2022, en asunto de idéntica naturaleza en que también fue demandada la AFP Porvenir S.A.:

(i) Del deber de información de las administradoras de pensiones

Esta Corporación ha considerado que, desde la implementación del sistema integral de seguridad social en pensiones, que incluyó la creación de las administradoras de pensiones, se estableció a cargo de estas el deber de ilustrar a sus potenciales afiliados, en forma clara, precisa y oportuna, acerca de las características de los dos regímenes pensionales a fin que pudieran tomar decisiones informadas (CSJ SL1452-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ 2611-2020 y CSJ SL1062-2021).

Lo anterior, toda vez que el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», prescribió en el numeral 1.º del artículo 97 la obligación de las mismas de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado», y la Ley 795 de 2003, «Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones», reiteró en su artículo 21 este deber, en el sentido que tal información tiene como propósito evaluar las mejores opciones del mercado y «poder tomar decisiones informadas».

La Sala también ha considerado que con el transcurrir del tiempo, el deber de información ha evolucionado a un mayor nivel de exigencia, y ha identificado tres etapas, conforme el avance normativo que regula el tema, así: el primero desde 1993 hasta 2009, el segundo desde 2009 hasta 2014 y, el último, de 2014 en adelante.

Entonces, de acuerdo a la fecha en la que el actora migró al régimen de ahorro individual con solidaridad –1.º de septiembre de 1999-, la obligación de la AFP se enmarcaba en el primer periodo; esto es, cuando debía brindar información clara y transparente acerca de los dos regímenes pensionales.

En consecuencia, el acto jurídico de traslado de régimen debió estar precedido de una ilustración, como mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias de su cambio y, por tanto, las AFP tenían a su cargo el verdadero e ineludible deber de obtener un consentimiento informado (CSJ SL19447-2017), entendido como el procedimiento que garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir que el afiliado, antes de dar su consentimiento, debe recibir información clara, cierta, comprensible y oportuna. Negrillas intencionales.

Estando, contrario a lo expuesto en el recurso de alzada, la carga de la prueba en cabeza de las administradoras, sin que sea requisito para su cumplimiento que el afiliado goce del beneficio de la transición o tenga un derecho pensional consolidado, ni se infiera de los formularios suscritos, adicional a que tampoco puede afirmarse que era la actora la que debió haberse informado, y era quien tenía a su cargo el deber de diligencia y cuidado, pues se está ante un tema de carácter técnico, en que cada precepto normativo tiene reglamentación y desarrollo jurisprudencial

concreto, debiendo analizarse la **situación particular y específica de cada afiliado frente al sistema**, siendo la consecuencia de la inobservancia de tal deber, en cabeza de las administradoras, desde la entrada en vigencia del sistema pensional, artículo 97 Dto. 663 de 1993, **la ineficacia del acto de traslado de régimen en los términos de los artículos 13 literal b) y 271 de la Ley 100 de 1993**, norma que a la letra, para lo que interesa, indica: *la afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador*, precepto a partir del cual se ha desarrollado la línea vigente en la jurisprudencia especializada, que esta Sala acoge como precedente vertical, pues se carece de razones para argumentar en contrario, como se pretende por el apoderado de Porvenir S.A., y siendo su consecuencia, para casos como el que se somete a estudio, que las cosas se retrotraigan al estado anterior, con la devolución de la totalidad de los aportes efectuados por el afiliado, con los rendimientos y deducciones, resultando innecesaria una extensa citación sobre el particular, y menos relacionar por radicación la gran cantidad de decisiones hasta la data actual proferidas por la Sala de Casación Laboral, bastando, para el caso, referir el contenido de la sentencia **SL843-2022**, radicación 85499, con fecha **16 de marzo de 2022**, en la que se explica en forma amplia lo dicho.

De acuerdo con ello, y por ser el precedente vigente en el órgano de cierre de esta especialidad, es el acogido por esta Sala de Decisión, advirtiéndose que en lo atinente a los rubros a devolver una vez declarada la ineficacia del acto de traslado, su actualización mediante el mecanismo de la indexación, y la obligación de las AFP de asumir lo descontado por gastos de administración, seguros previsionales y garantía de pensión mínima con su propio patrimonio, surgen, entre otras, a partir de las sentencias **SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710, SL3349-2021, SL4803-2021, SL4609-2021** reiteradas, entre otras en las **SL755-2022, SL756-2022, SL843-2022, SL1019-2022 y SL1055-2022**, sin

que pueda afirmarse que con esto se emite una doble condena o que exista la posibilidad de compensar suma alguna con los rendimientos, pues, fue la actuación de la AFP la que dio lugar a la ineficacia del acto, debiendo Colpensiones, con ocasión de tal sanción, responder por las prestaciones que correspondan dentro del sistema, al no haber tenido ningún efecto la pertenencia al régimen de ahorro individual, y disponerse la restitución integral de aportes, decisión que, por demás, no se torna caprichosa, dado que, **como ya se advirtió acata el precedente vertical reiterado en más de 3 providencias que constituyen doctrina probable**, por lo que se **confirma** la sentencia revisada en cuanto ordenó a la AFP Porvenir S.A. restituir con su propio peculio las sumas descontadas durante el tiempo de afiliación de la actora, por concepto de gastos de administración, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados.

Los rubros antes mencionados no se encuentran afectados por el fenómeno extintivo de la prescripción, pues pese a que los mismos no están ligados al reconocimiento de la prestación, si están íntimamente relacionados con la declaratoria de ineficacia, la cual según criterios ya expuestos de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral no prescribe, sumado a que solo en el trámite del proceso es que fue declarada.

No se está en este caso autorizando un traslado de régimen desatendiendo la restricción temporal del artículo 2º de la Ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, *después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez*, sino imponiendo la sanción de ineficacia por no haberse dado una libertad informada en la elección de régimen pensional al momento del traslado, en los términos del literal b) de la misma norma, en concordancia

con el artículo 271 del mismo estatuto, decisión con la que en manera alguna se atenta contra la sostenibilidad financiera del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, pues con el traslado integro de recursos se garantiza la equivalencia de condiciones en aportes en el evento de haberse mantenido la vinculación, máxime cuando si bien es cierto esta es una regla introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el 48 de la Constitución Política, debe tenerse en cuenta el Acto Legislativo 03 de 2011, artículo 1º, que modificó el artículo 334 superior relativo al régimen de Hacienda Pública, que en su **parágrafo** reza: ***al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su efectiva protección.***

Y por último se precisa, que si bien es cierto en los fundamentos de la demanda se afirma que una de las razones para promover esta acción es obtener una mejor mesada pensional, ello se encuentra acorde con el calificativo irrenunciable de la seguridad social, que no procura exclusivamente por el reconocimiento formal de las prestaciones fundamentales que ella comporta, sino que desde un enfoque material, busca la satisfacción en su totalidad a fin de que los derechos e intereses objeto de protección sean reales y efectivos; *en este sentido, el derecho a la pensión se ve sustancialmente afectado cuando la prestación económica no es reconocida en su monto real y con todos los elementos que la integran; si además se tiene en cuenta que una pensión deficitaria no cumple su propósito de garantizar una renta vitalicia digna y proporcional al salario que el trabajador devengó cuando tenía su capacidad laboral inalterada.* Ver sentencias SL8544 y SL 13430 de 2016.

Sumado a que sobre el particular la Sala de Casación Laboral en providencia SL1055-2002, precisó:

Ahora, si bien en el presente asunto uno de los argumentos del accionante fue el relativo a demostrar que su pensión en prima media sería más favorable que en el RAIS, esto de ningún modo debe permitir desviar la atención a lo importante, esto es, verificar si al momento del traslado efectivo el afiliado accedió a una información clara y precisa sobre las ventajas, desventajas y riesgos de cada régimen en los términos explicados. Y tampoco difumina lo anterior el hecho de que la persona no haya retornado a prima media en los términos de ley, pues se reitera, lo que concierne a estos asuntos es constatar el obedecimiento de dicho deber legal de información, independientemente de que la persona tenga o no aquella posibilidad legal de retorno.

Y con relación a la **condena en costas**, baste decir que las mismas son una simple consecuencia procesal del ejercicio de la acción o de la excepción, que se traduce en una obligación que se dirige contra el patrimonio de la parte vencida, que otorga a favor del vencedor un derecho de reintegro de los gastos procesales en los que se ha visto obligado a incurrir (auto Sala de Casación laboral Corte Suprema del 24 de enero de 2007, radicado 31.155, reiterado en sentencia SL 5141-2019), sin que sea dable entrar a analizar la buena o mala fe de la entidad en el transcurso del proceso, por lo que se confirma el proveído atacado en este apartado.

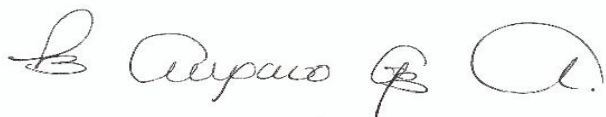
Costas en esta instancia a cargo de Porvenir S.A., a quien se desata adversamente el recurso interpuesto (art. 365-1 del C. G. del P.), las agencias en derecho se fijan en la suma de **\$1.160.000,00** y en favor de la parte actora.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por **Marleny de Jesús Naranjo Hoyos**, en contra de la **AFP Porvenir S.A, y Colpensiones**.

Costas en esta instancia a cargo de Porvenir S.A., las agencias en derecho se fijan en la suma de **\$1.160.000,00** y en favor de la parte actora.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Las magistradas (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO